

LA CORONA Y LAS AUTORIDADES URBANAS EN EL PORTUGAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN. ENTRE LOS HABSBURGO Y LOS BRAGANZA*.

Pedro Cardim

Universidad Nueva de Lisboa

Hoy se sabe que las instituciones municipales desempeñaron un papel de primer orden en la política del Portugal del Antiguo Régimen. Gracias a los estudios de Joaquim Romero de Magalhães¹, de António Manuel Hespanha², de José Viriato Capela³ o de Nuno Gonçalves Monteiro⁴, sabemos que los ayuntamientos –cámaras– protagonizaron la organización de la vida local, disfrutando de una vitalidad política muy considerable. La capacidad reguladora de los municipios portugueses, resultado de la ancestral capacidad auto-organizativa de las comunidades locales, seguía siendo muy fuerte durante los siglos XVI y XVII, de modo que la Corona no tenía más alternativa que contar con ellos durante los procesos gubernativos y administrativos. En consecuencia, en diversas ocasiones la Corona y las autoridades municipales estaban abocadas a interactuar, desarrollando una relación que, como veremos, alternó entre la colaboración y el enfrentamiento.

La finalidad de este estudio es caracterizar, de un modo sucinto, la forma como las autoridades urbanas y la Corona se relacionaron durante el periodo comprendido entre 1580 y 1668, o sea, durante los sesenta años de agregación de Portugal a la Monarquía Hispánica y los primeros treinta de la nueva dinastía de Braganza. En primer plano estarán las cuestiones administrativas y gubernativas que, en el transcurso del periodo que analizamos, pusieron en contacto a la Corona y a las autoridades municipales: ante todo, el fisco; junto a éste, la problemática militar. Los impuestos y las fuerzas militares fueron los temas que motivaron un contacto más intenso entre el poder central y el poder local, sobre todo durante el siglo XVII, periodo en el que la fuerza política de los municipios se hizo más visible. El itinerario que voy a efectuar permitirá evaluar los contornos de esa vitalidad política de las autoridades urbanas, pero, sobre todo, comparar los modos de lidiar con las instituciones municipales portuguesas de los monarcas Habsburgo y de los reyes de la dinastía de Braganza.

1. La vitalidad política de las autoridades urbanas.

Como decíamos, a lo largo de toda la época que estamos considerando, las corporaciones urbanas disfrutaron de una considerable operacionalidad política. Esa operacionalidad se materializaba, sobre todo, en su capacidad de autogobierno, o sea, las ciudades y villas portuguesas –a semejanza de sus congéneres ibéricas y sudeuropeas⁵– poseían mecanismos que

¹ J. ROMERO MAGALHÃES., *O Algarve Económico, 1600-1773*, Lisboa, 1993; J. ROMERO MAGALHÃES e M. H. CRUZ COELHO., *O Poder Concelhio. Das Origens às Cortes Constituintes. Notas da História Social*, Coimbra, 1986.

² A. M. HESPAÑA., *As Vésperas do Leviathan. Instituições e Poder Político. Portugal, Século XVII*, Coimbra, 1995.

³ J. V. CAPELA., *O Minho e os seus Municípios. Estudos Económico-Administrativos sobre o Município Português nos Horizontes da Reforma Liberal*, Braga, 1995.

⁴ N. G. MONTEIRO., “Os Poderes Locais no Antigo Regime” in C. de OLIVEIRA (dir.), *História dos Municípios e do Poder Local (Dos finais da Idade Média à União Europeia)*, Lisboa, 1996, pp. 17-175.

⁵ Cfr. J. I. FORTEA PÉREZ., “Las Ciudades, las Cortes y el Problema de la Representación Política en la Castilla Moderna” en J. I. FORTEA PÉREZ (dir.), *Imágenes de la Diversidad. El Mundo Urbano en la Co-*

aseguraban la administración de justicia y el gobierno económico y militar del espacio urbano, hasta el punto que la mayoría de ellas se encontraban en una situación de *quasi-autosuficiencia*. Además, la capacidad política de las autoridades municipales se materializaba igualmente en el constante empeño de las corporaciones urbanas por mantener la autonomía del espacio jurisdiccional de la ciudad⁶. Y esa fuerte conciencia de autonomía hizo que, durante esos años, los ayuntamientos reaccionasen siempre contra todo tipo de intromisiones venidas del exterior, ya fuesen iniciativas regias, eclesiásticas o aristocráticas⁷.

La capacidad política de las corporaciones urbanas se hacía especialmente visible en los momentos en los que la jurisdicción municipal entraba en diálogo con la jurisdicción regia. Eso sí, hay que señalar que ese diálogo no era siempre conflictivo. Durante el periodo que estamos considerando, las oligarquías urbanas, especialmente las de las principales ciudades, solían comunicarse con la Corona para participar en los procesos de decisión gubernativos. Esa comunicación solía procesarse cotidianamente, por ejemplo, por medio de documentos que se intercambiaban los ministros regios y los dignatarios municipales, y en esa documentación la realeza demostraba que era consciente de que una parte significativa del orden comunitario dependía de la acción de esas instituciones. Por eso, en vez de hostilizarlas, las favorecía y contribuía, en la medida de sus posibilidades, a su estabilidad, dando continuidad a una relación de colaboración entre el poder central y los poderes locales⁸.

En los siglos del quinientos y el seiscientos, esta comunicación política entre las autoridades locales y la realeza podía incluso asumir contornos más ceremoniales, como lo que sucedía en las "asambleas de Cortes". Las Cortes, también conocidas como "asamblea de los tres estados", eran un órgano que representaba las diversas partes del cuerpo social, incluyendo a las autoridades municipales de las ciudades y villas dispersas por el reino. Durante los siglos XVI y XVII su convocatoria se hizo más frecuente. Al contrario de lo que sucedía en Castilla -donde, desde 1538, a las cortes sólo acudían los procuradores de las ciudades-, en Portugal el rey siguió llamando a los "tres estados" hasta finales del siglo XVII⁹. Los reyes portugueses tenían la costumbre de convocar a los representantes de las ciudades antes de tomar las decisiones gubernativas de mayor trascendencia y, desde el punto de vista de la realeza, convocar a las Cortes equivalía a "llamar al reino", "oír al reino", o "solicitar la aprobación del reino", expresiones usadas durante aquel periodo que denotaban, también, un acto de comunión entre el rey y el reino. Al llamar a los representantes de las ciudades, el monarca daba cuerpo a una noción de gobierno participado, a un estilo de toma de decisiones que se reputaba como el más indicado cuando estaban en juego cuestiones que atañían a toda la comunidad. Llamados ordenadamente, es decir, de acuerdo con los usos ancestralmente practicados en Portugal, los diversos cuerpos del reino -y entre ellos, las ciudades y las principales villas- veían concretizada su capacidad para participar en los pro-

rona de Castilla (s. XVI-XVIII), Santander, 1997, pp. 427ss.; y P. COSTA, "Storia della Cittadinanza" en *Europa. Dalla Civiltà Comunale al Settecento*, Bari, 1999, pp. 23 ss.

⁶ Cfr. N. G. MONTEIRO, "Os Concelhos e as comunidades" en A. M. HESPANHA, *O Antigo Regime (1620-1807)*, Lisboa, 1993, pp. 303-331; N. G. MONTEIRO, "Os Poderes Locais no Antigo Regime...", cit., pp. 29 ss.; M. CAETANO, "Da Antiga Organização dos Mesteres", en F-P. LANGHANS, *As Corporações dos Ofícios Mecânicos. Subsídios para a sua História*, Lisboa, 1943, vol. 1, pp. I-LXXXIII.

⁷ Cfr. in genere M. da G. F. PINTO GARCIA, *Da Justiça Administrativa em Portugal. Sua origem e evolução*, Lisboa, 1994.

⁸ I. A. A. THOMPSON, "Castile" en J. MILLER (dir.), *Absolutism in Seventeenth Century Europe*, Londres, 1990, pp. 79 ss.

⁹ Cfr. in genere P. CARDIM, *Cortes e Cultura Política no Portugal do Antigo Regime*, Lisboa, 1998.

cesos de decisión. Sin embargo, cuando la convocatoria no obedecía a los usos ancestrales, esa capacidad de decisión parecía disiparse y, en su lugar, emergían el tumulto y el rumor. Esto sucedía con las decisiones tomadas cuando el reino se encontraba “desordenado”, o sea, cuando no se respetaban los mecanismos “naturales” de representación de la comunidad. Nos deparamos aquí, por tanto, con un aspecto importante del significado constitucional de las cortes, materializado en el imperativo de un procedimiento debido y “ordinario”, y en la repugnancia hacia los estilos nuevos, “extraordinarios”, que eran encarados como elementos de “disfunción” que podían desvirtuar, quizá irreparablemente, los fundamentos del sistema político.

En lo que concierne a las autoridades urbanas, acudían a las Cortes de Portugal cerca de cien “ciudades y villas con asiento en cortes”. Su convocatoria era un gesto de reconocimiento, por parte del rey, del importante papel de regulación comunitaria desempeñado por estas instituciones. Cada una de esas localidades tenía derecho a enviar dos individuos con capacidad para representar a la colectividad, los llamados “procuradores”. El “estado del pueblo” estaba, por consiguiente, compuesto por más de dos centenares de procuradores enviados por cerca de cien ciudades y villas con derecho a estar presentes en las Cortes.

Sin embargo, junto a esta práctica “participada” de gobierno, en ciertas coyunturas la Corona se reveló mucho menos dispuesta a consultar a los representantes de las instituciones urbanas, tomando decisiones de forma más autoritaria, o sea, sin consultar a las ciudades y villas y llegando incluso a interferir en su espacio jurisdiccional. Como se podría prever, en esas ocasiones el diálogo entre la Corona y las autoridades municipales se tornaba menos armonioso, y la colaboración era sustituida por la disensión. En vez de reconocer el valor complementario desempeñado por las autoridades urbanas, el rey pasaba a encarar la jurisdicción municipal como un obstáculo a su política. La respuesta de las autoridades urbanas a esta actitud de la Corona era, naturalmente, de resistencia. La resistencia podía asumir diversas formas, desde el resentimiento más sutil hasta el motín de carácter violento.

Como vamos a verificar, la relación entre la Corona y los municipios portugueses, durante el periodo comprendido entre 1580 y 1668, presenta momentos de franca colaboración y coyunturas de fricción y conflicto.

2. *Los Habsburgo ante los municipios portugueses (1580-1640).*

Al tratar el sistema de relaciones entre la monarquía y las autoridades urbanas después de la agregación de Portugal a la Monarquía Hispánica, es preciso comenzar señalando que el primero de los tres Felipes que reinaron en Portugal demostró poseer una fuerte conciencia del poderío de las ciudades y de su papel en tanto que estructura básica de la organización comunitaria. Al llamar a los representantes municipales a las Cortes de Tomar, en 1581, y al honrar a Lisboa -la “cabeza” de las ciudades portuguesas- realizando en ella una entrada solemne, D. Felipe I de Portugal (Felipe II de España) demostraba, de forma inequívoca, que contaba con las autoridades municipales y que estaba dispuesto a respetar su identidad jurisdiccional -sus “libertades”, como se decía en la época-, al tiempo que solicitaba su colaboración para el mantenimiento del reino en buen orden¹⁰. No obstante, a pesar de que el monarca pretendiese transmitir señales de continuidad, la verdad es que, para la sensibili-

¹⁰ Cfr. maxime F. BOUZA ÁLVAREZ., *Portugal en la Monarquía Hispánica (1580-1640). Felipe II, las Cortes de Tomar y la génesis del Portugal Católico*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1986, pp. 321 ss.

dad portuguesa, la entrada del reino en la esfera de los Habsburgo españoles significó una cierta ruptura, pues el gobierno de D. Felipe I apostó, desde muy pronto, por un control más estrecho de las instituciones portuguesas y del sistema de cobro del fisco. El dispositivo denotaba la vasta experiencia adquirida en la gestión de los territorios de los Habsburgo, por lo que se reveló capaz de perfeccionar el sistema político-administrativo lusitano, algo que llevó a la intensificación de la interacción política entre la Corona y las diversas ciudades y villas portuguesas. Además, para muchos portugueses esa debió ser la primera ocasión en la que sintieron que estaban siendo dirigidos por un dispositivo capaz de hacer sentir su influencia en el conjunto del territorio.

A semejanza de lo que sucedía en Castilla, en ciertas ocasiones el rey intentaba interferir en los asuntos municipales, extendiendo su clientela hasta las elites urbanas y logrando nombrar algunos oficios en los ayuntamientos de las principales urbes portuguesas¹¹. Es cierto que el monarca, entre 1583 y 1598, nunca convocó las Cortes, la asamblea magna en la cual, por excelencia, las ciudades del reino aconsejaban al rey y participaban en la toma de decisiones gubernativas. No obstante, la Corona tampoco tomó iniciativas fiscales importantes, por lo que durante ese reinado tampoco se escucharon los habituales pedidos para que los “tres estados” se reuniesen y examinasen la justicia de un eventual nuevo tributo. En ausencia de Cortes, la comunicación política entre el rey y las autoridades se canalizó, esencialmente, por medio del Consejo de Portugal -con sede en Madrid-, pero también por medio de los demás órganos de la Corona -tribunales y consejos eclesiásticos y seculares- y, además, por medio del Ayuntamiento de Lisboa, el cual, como “cabeza” de las ciudades del reino, representaba de alguna forma los intereses de los diversos núcleos urbanos y de las corporaciones que los gobernaban.

Aún así, la gobernación de los Habsburgo entró en materias que la pusieron necesariamente en contacto con los poderes urbanos: en 1585, por ejemplo, procedió a la reorganización de las compañías de Ordenanzas, para hacer frente a los ataques de los corsarios ingleses. Sabemos que no todos los municipios acataron las órdenes regias, y que la presencia de tropas castellanas en Portugal, como refuerzo del dispositivo de defensa contra los ataques a la línea costera, también provocó problemas con las autoridades municipales, que sintieron esa presencia militar como una violación de su espacio de actuación exclusiva¹². Igualmente, fue desfavorable la recepción que el Ayuntamiento de Oporto dispensó al nuevo *Tribunal da Relação*, por recelar que sus libertados y privilegios fuesen amenazados con la llegada de este nuevo tribunal de la Corona. En el fondo, la respuesta dada por los poderes urbanos a las iniciativas de D. Felipe I obedece a la misma matriz corporativa que identificábamos anteriormente: la “nobleza local”, la gente dedicada al gobierno en cada una de las ciudades, cuidaba celosamente del espacio político local, el cual, de algún modo, consideraban “suyo”, por lo que reaccionaba siempre con hostilidad ante las intromisiones venidas del exterior¹³.

¹¹ Cfr. con I. A. A. THOMPSON, “Patronato Real e Integración Política en las Ciudades Castellanas Bajo los Austrias” en J. I. FORTEA PÉREZ (dir.), *Imágenes de la Diversidad. El Mundo Urbano en la Corona de Castilla (s. XVI-XVIII)*, Santander, 1997, pp. 487 ss.

¹² F. BOUZA ÁLVAREZ, “Entre as Alterações de Beja e a «Revolta dos Ingleses» (1596), em Lisboa. Luta Política no último Portugal do Primeiro Filipe”, *Portugal no Tempo dos Filipes. Política, Cultura, Representações (1580-1668)*, Lisboa, 2000, pp. 129-157.

¹³ Cfr. P. CARDIM, “Política e Identidades Corporativas no Portugal de D. Filipe I”, VVAA., *Estudos em Homenagem ao Professor Doutor João Marques*, Porto, 2002.

Con la subida al trono de Felipe III de España (D. Felipe II de Portugal), en 1598, en la corte de Madrid muchas voces manifestaron la esperanza de que el nuevo monarca gobernase con un pulso más firme. En un estudio reciente, Antonio Feros recordó que durante los últimos años del reinado de Felipe II habían surgido críticas al monarca y al modo como lidiaba con la cuestión portuguesa¹⁴. Algunos dignatarios de la corte, incluso, expresaron la opinión de que Portugal debería haber sido anexionado y convertido en una provincia. Comentarios del mismo tipo se realizaban respecto a la postura que había mantenido Felipe II frente a los otros fueros regnícolas -como era el caso de Aragón, por ejemplo-. Durante el reinado de Felipe III se discutió mucho el modo de encarar los particularismos regnícolas, algo que, como ya se ve, tendría importantes consecuencias sobre el papel político reservado a las ciudades. De hecho, la conversión del estatuto de Portugal, su paso de reino a provincia, afectaría, necesariamente, al peso político de las urbes portuguesas¹⁵.

En lo que respecta a las relaciones de la Corona con los demás reinos de la Monarquía Hispánica, Antonio Feros demostró que el duque de Lerma, valido de Felipe III, mostró varias veces una sutil animosidad contra la estructura compuesta y particularista de la Monarquía¹⁶. Esto hacía que las iniciativas de la Corona se topasen constantemente con el particularismo de los diversos reinos y territorios, volviendo a la Corona demasiado dependiente de la colaboración de las instituciones castellanas. Fueron, además, las dificultades inherentes a la estructura de la Monarquía Hispánica las que causaron que Felipe II iniciase el proceso de identificación de la Monarquía Hispánica con Castilla. Hay que recordar que, si bien el primero de los tres Felipes que reinaron en Portugal realizó pocas visitas a sus reinos, Felipe III viajó aún menos, sin llegar a salir de la Península Ibérica. En 1599 visitó Aragón y Cataluña. Sólo en 1619 realizó un famoso viaje a Portugal, después de muchos años de trabajosas negociaciones con las ciudades lusitanas. Estas se mostraban bastante reacias a la hora de contribuir para los gastos del viaje del monarca¹⁷.

En el estudio ya citado, Antonio Feros recuerda que a inicios del Seiscientos Portugal tenía fama de ser un reino -y un imperio- rico. Además, el propio Feros señala que no faltaban quienes se quejasen de los vasallos portugueses, recordando que hasta ese momento habían contribuido muy poco al esfuerzo conjunto de la Monarquía Hispánica. Juan de Borja -uno de los ministros más poderosos de aquella época-, llegó incluso a sugerir al duque de Lerma, en una carta de Julio de 1600, que el rey debía y podía obtener de Portugal aquello que necesitaba. "Nadie les ha tocado en treinta años", concluía Lerma, lo que hacía suponer que las finanzas portuguesas estarían en un magnífico estado. Además, Antonio Feros relata que Lerma se enfureció cuando supo que los vasallos lusos habían respondido con un seco "no hay nada" a las peticiones de Felipe III para que Portugal aumentase su contribución financiera para la Monarquía¹⁸.

Entre las medidas tomadas dirigidas a aumentar la contribución financiera de Portugal, durante el periodo que va de 1589 a 1621, destaca la creación de la *Junta da Fazenda*, con sede en Lisboa y compuesta por oficiales castellanos ejerciendo jurisdicción en Portugal. Por medio de esta junta se procuró instaurar un control más estrecho sobre las cuestiones

¹⁴ A. FEROS., *Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III, 1598-1621*, Cambridge, 2000, pp. 50 ss.

¹⁵ Cfr. F. BOUZA ÁLVAREZ., "Lisboa Sozinha, Quase Viúva. A Cidade e a Mudança da Corte no Portugal dos Filipes", en *Portugal no Tempo dos Filipes...*, op. cit., pp. 161-183.

¹⁶ A. FEROS., *Kingship and Favoritism...*, cit., p. 159.

¹⁷ Cfr. F. BOUZA ÁLVAREZ., "Retórica da Imagem real. Portugal e a Memória Figurada de Filipe I", en *Portugal no Tempo dos Filipes...*, op. cit., pp. 91 ss.

¹⁸ A. FEROS., *Kingship and Favoritism...*, cit., pp. 160 ss.

financieras, así como reprimir el contrabando. Hay que señalar que otro de los objetivos de esa junta era vigilar, más atentamente, la actuación de las autoridades urbanas en lo que respectaba a la administración fiscal. Paralelamente, en Madrid se constituyó una *Junta de Hacienda* especializada en cuestiones lusitanas, pero también compuesta por ministros castellanos, algo que ofreció a los dignatarios portugueses un buen pretexto para resistirse¹⁹. Las reacciones a estas iniciativas no se hicieron esperar, y Antonio Feros cuenta que, en noviembre de 1603, Juan de Borja relató ante el Consejo de Estado que a los portugueses “les parecía que aquel reino había sido reducido a provincia, como si hubiera sido conquistado”²⁰. No obstante, los grandes cambios en las relaciones entre la Corona y las autoridades urbanas estaban reservados al siguiente reinado. Sólo con la subida al trono de Felipe IV de España, III de Portugal, comenzaron a ser puestos en práctica muchos de aquellos planes.

La década de 1620 trajo importantes novedades en los ámbitos político, institucional y fiscal. Esas novedades fueron introducidas durante el *valimiento* de D. Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares, en el ámbito del cual fue implementado un estilo de gobierno que generó tensiones en diversos sectores de la sociedad portuguesa y, muy especialmente, de las instituciones municipales. Como se sabe, la creciente presión militar resultante de la “Guerra de los treinta años” fue la causante de muchas de las medidas preconizadas por Olivares, entre las cuales sobresale un reformismo de tendencia centralizadora. Entre las varias resoluciones tomadas durante esos años, hay que destacar la implementación de la llamada *Unión de Armas*, o sea, la concentración de los recursos financieros de los diversos territorios de la Monarquía para así enfrentarse, de modo más eficaz, a los enemigos de la Casa de Habsburgo²¹.

En lo que respecta a Portugal, la *Unión de Armas* dependía, entre otras cosas, de un mejor aprovechamiento de sus recursos financieros, lo que implicaba, necesariamente, la instauración de mecanismos más apretados de control, así como la imposición de nuevas contribuciones fiscales sobre las comunidades urbanas. En ese sentido, el Conde-Duque fue implementando un conjunto de medidas destinadas a combatir el déficit que las cuentas de la Corona presentaban al acabar cada año. La inflación, aliada al aumento de los gastos administrativos y a los reverses militares en ultramar –que provocaron una fuerte quiebra de los ingresos de la Corona portuguesa– llevaron a Olivares y su equipo a tomar una serie de medidas excepcionales. Entre las primeras resoluciones estuvo la de exigir contribuciones fiscales de carácter extraordinario a grupos que hasta entonces prácticamente no habían sentido la creciente presión tributaria de los años anteriores, destacando entre ellos, los donatarios de bienes de la Corona y los propios eclesiásticos. No obstante, el gran símbolo de la fiscalidad de esos años fue, sin duda, la “*media annata*” una contribución que obligaba a los oficiales de la Corona a pagar la mitad de los rendimientos recibidos durante un año²². Además, el equipo de Olivares puso en marcha un control más estrecho del cobro y la administración de los rendimientos de las aduanas, combatiendo el fraude fiscal de una forma

¹⁹ J-F. SCHAUB., “Dinámicas políticas en el Portugal de Felipe III (1598-1621)”, *Revista Relaciones*, (1998); G. MARQUES., “La dynamique politique au Brésil sous le règne des Habsbourg. L’Estado do Brasil dans l’Union ibérique”, *Penélope. Revista de História e Ciências Sociais* (en prensa).

²⁰ A. FEROS., *Kingship and Favoritism*..., cit., pp. 161.

²¹ J-F. SCHAUB., “La crise Hispanique de 1640. Le modèle des “révolutions périphériques” en question (note critique)”, *Annales. HSS*, 1 (Jan.Fev. 1994) pp. 223 ss.; J-F. SCHAUB., *Portugal na Monarquia Hispânica*, Lisboa, 2001.

²² J-F. SCHAUB., *Le Portugal au Temps du Comte-Duc D’Olivares (1621-1640). Le conflit de juridiction comme exercice de la politique*, Madrid, 2001, pp. 160 ss.

mucho más determinada de lo que había sucedido en los años anteriores. Esta medida hizo que los oficiales se inmiscuyesen en el interior del espacio jurisdiccional de los municipios.

En Portugal el *valimiento* de Olivares se distinguió, por tanto, por una actitud de control y de vigilancia, y ahí reside una de las causas de la impopularidad de la que gozó durante esa época. Además, las autoridades locales y las oligarquías urbanas no tardaron en protestar contra el “extraordinario fiscal”, ni tampoco contra la emergencia de esos mecanismos administrativos que interferían en sus áreas jurisdiccionales y trastocaban los equilibrios sociales establecidos desde antaño. El clima de contestación que surgió entonces acabó siendo favorecido por la situación económica que se vivía durante los últimos años de la década de 1620. Por entonces se sentía una fuerte carestía de vida debida al aumento del precio de los cereales. Así, en 1628-1629 tuvieron lugar levantamientos anti-fiscales contra la “renta fija”, una imposición anual dedicada a financiar, precisamente, la *Unión de Armas*²³.

Junto a ese esfuerzo por aprovechar mejor los recursos financieros portugueses, Olivares y su equipo entraron en otro dominio que se reveló altamente conflictivo. De hecho, durante el “ministerio” del Conde-Duque, en la corte madrileña volvieron a circular consultas y arbitrios en los que se proponía una importante alteración del *status quo* político de Portugal, en el cuadro de la centralización político-institucional a la que hacíamos alusión. En el fondo, Olivares buscaba formas más expeditas de lidiar con los complejos problemas que afectaban cotidianamente a los diversos territorios de la monarquía. Dentro de ese espíritu, encaraba el recurso a juntas y grupos restringidos, compuestos por oficiales de carácter comisarial, como la mejor forma de agilizar el gobierno y la administración, sobretudo en los dominios fiscal y comercial. Como señaló António Hespanha²⁴, esta opción acarrea, entre otras cosas, la instauración de nuevos mecanismos de comunicación con las autoridades urbanas: prescindiendo de las cortes -las cuales, de hecho, no fueron convocadas entre 1621 y 1640-, Olivares privilegió la comunicación directa con las principales ciudades del reino, con lo que evitaba la presión que los poderes urbanos podrían ejercer una vez reunidos en una asamblea de estados.

En lo esencial, el objetivo de Olivares era incrementar el control político sobre las autoridades urbanas. Pero el problema estaba en que esas medidas, al ponerse en práctica, afectarían al estatuto de Portugal en cuanto reino independiente aunque simultáneamente agregado a los dominios de la casa de Habsburgo. Gracias a las investigaciones de Jean-Frédéric Schaub sabemos hoy que durante la década de 1620 se discutió en Madrid la posibilidad de suprimir -o por lo menos atenuar- la situación separada que, en términos políticos, Portugal gozaba desde 1581. Se hablaba, incluso, de la convocatoria de una asamblea de Cortes con una nueva estampa: una asamblea que reuniese, en una misma sesión, a representantes de ciudades castellanas, leonesas y portuguesas, para que llegasen a concretar medidas conjuntas²⁵. Es cierto que esos planes no fueron implementados de manera sistemática, pero su simple enunciación no dejó de generar tensiones y un fuerte malestar entre algunos sectores

²³ A. de OLIVEIRA., *Poder e Oposição Política em Portugal no Período Filipino (1580-1640)*, Lisboa, 1991, pp. 161 ss.

²⁴ A. M. HESPANHA., “O governo dos ‘Austrias’ e a ‘modernização’ da constituição política portuguesa”, *Penélope. Fazer e Desfazer a História*, 12 (1989) pp. 50-73; B. CARCELES DE GEA., “El conde-duque de Olivares y los tribunales de la Corte: oposición política y conflicto constitucional”, *Cuadernos de investigación histórica*, 13 (1990) pp. 7-35.

²⁵ Cfr. maxime J-F SCHAUB., *Le Portugal au Temps du Comte-Duc D'Olivares (1621-1640). Le conflit de jurisdiction comme exercice de la politique*, op. cit., pp. 135 ss.

influyentes de la sociedad portuguesa, que poco a poco fueron quebrando su solidaridad con las autoridades de Madrid. En las ciudades, esos planes se recibieron con aprensión, pues parecía claro que conllevarían una despromoción del estatuto de las instituciones urbanas portuguesas, lo que las retiraría parte de su capacidad política. No obstante, a pesar de ese paulatino alejamiento entre los grupos influyentes portugueses y la clientela de Olivares, hay que señalar que hasta 1640 Portugal no dejó de mantener su estatuto independiente frente a los otros territorios que estaban bajo la alzada de los Habsburgo y que, de una forma general, se respetó su dispositivo institucional.

Durante la década de 1630 el descontento iba creciendo, incluso porque Olivares seguía promoviendo una política de control de las instituciones portuguesas. En 1631, por ejemplo, constituyó una nueva *Junta de Fazenda*, y ésta pasó a intervenir en áreas jurisdiccionales que hasta entonces eran exclusivas de las instituciones lusitanas²⁶. Esta situación provocó un vivo escándalo en Portugal. Por otra parte, y para encarar la sistemática desobediencia pasiva de muchos oficiales, fue planeada una *visita* general al *oficialato* de justicia, un plan que estuvo en el origen de una nueva oleada de insatisfacción. Durante las décadas de 1620 y 1630 la situación interna del reino no era pacífica, pero tampoco lo era en el ámbito externo, donde los intereses del Portugal de los Felipes encontraron numerosos problemas. Casi todos los puntos del imperio ultramarino fueron alcanzados por la competencia holandesa. La situación se tornó especialmente grave en América del Sur, donde las fuerzas holandesas, después de llegar al Nordeste azucarero del Estado del Brasil -con la ocupación de Bahía en 1624-1625-, iniciaron la instalación permanente de tropas holandesas en la región de Pernambuco. En Portugal, esta sucesión de acontecimientos se sintió como una gran derrota, en especial en los círculos mercantiles²⁷.

Entretanto, iba aumentando el número de aquellos que, en el reino, se oponían a los planes fiscales de Olivares. En 1637-38, tuvo lugar un ciclo de revueltas en el Alentejo y el Algarve²⁸. Significativamente, las autoridades urbanas se encontraban entre los agitadores de esas revueltas, contribuyendo a boicotear la política del “extraordinario fiscal” que estaba siendo implementada en Portugal desde la década de 1620. Respecto a las revueltas y levantamientos de entonces, hoy sabemos que una buena parte de la agitación había sido animada por los propios poderes municipales, los cuales, debido a su proximidad con las poblaciones, disponían de todos los medios para organizar campañas de descrédito e instrumentalizar el resentimiento popular.

A mediados de 1638, la situación alcanzó un punto máximo de ruptura, de lo que se dieron cuenta las autoridades de Madrid. En octubre de ese año, Olivares convocó una junta de notables portugueses para que acudiesen a la corte madrileña, con el objetivo de pacificar la situación política y social del reino, pero esta medida tuvo exactamente el efecto contrario. Varias ciudades alegaron que las Cortes eran el lugar más adecuado para esa discusión, mas Olivares se obstinaba en no convocar esa asamblea. Pasado poco tiempo, el valido de Felipe IV ordenó la supresión del Consejo de Portugal (1639) y su sustitución por dos juntas²⁹.

²⁶ Ibidem., pp. 153 ss.

²⁷ Cfr. L. F. de ALENCASTRO., *O Trato dos Videntes. Formação do Brasil no Atlântico Sul. Séculos XVI e XVII*, São Paulo, 2000, pp. 188 ss.

²⁸ A. de OLIVEIRA., “O atentado contra Miguel de Vasconcelos em 1634”, *O Instituto*, 140-141 (1984); J. ROMERO DE MAGALHÃES., “1637: motins da fome”, *Biblos*, 52 (1976).

²⁹ J-F. SCHAUB., *Le Portugal au Temps du Comte-Duc D'Olivares (1621-1640)...* cit., pp. 175 ss. S. de LUXÁN MELENDEZ., *La Revolución de 1640 en Portugal, sus Fundamentos Sociales y sus Caracteres Nacionales. El Consejo de Portugal: 1580-1640*, Madrid, 1988.

Además de esta drástica medida –que para muchos anunciaba la “despromoción” del reino de Portugal y su conversión en una mera provincia de Castilla–, Olivares anunció también la movilización de la aristocracia portuguesa para participar en la defensa de Portugal y en la guerra de Cataluña. Para Fernando Bouza Álvarez, estas medidas aceleraron la definitiva quiebra de los principios que habían sido establecidos 60 años antes, en el “Estatuto de Tomar”³⁰. A su vez, las dos juntas que sustituyeron al Consejo de Portugal provocaron un gran descontento, pues la esfera de competencias de esos nuevos órganos interfería en el ámbito jurisdiccional de otras instituciones preexistentes. Como se podría esperar, las instituciones más antiguas protestaron contra la creación de esas juntas, y muchas de ellas acabarían boicoteándolas y bloqueando sus decisiones.

Para enturbiar aún más la atmósfera que se vivía en Portugal, la presión fiscal sobre las ciudades no dejaba de aumentar. En Junio de 1640, la virreina Margarita de Mantua y el secretario Miguel de Vasconcelos se reunieron con algunos dignatarios para averiguar de donde se podría obtener más dinero para la defensa del reino³¹. Los dignatarios que participaron en esa sesión se encontraron con noticias, como mínimo, alarmantes: la Corona había decidido unilateralmente suspender el tercer cuarto de los juro y de los beneficios de las tenencias de 1640, para así hacer frente a los gastos militares. Además, se les informó que esa suspensión alcanzaba a todas las situaciones estatutarias, incluyendo al cuarto del estado eclesiástico, una noticia que escandalizó ostensiblemente a los representantes del clero presentes en la reunión. Durante los meses siguientes, Miguel de Vasconcelos y otros miembros del equipo gubernamental de Olivares se desdoblaron en iniciativas que afectaron, directa o indirectamente a las libertades municipales: intentaron mejorar el sistema de reclutamiento de soldados en Portugal; intentaron ejecutar los cobros del dinero que varios “hombres de negocios” lusitanos debían a la Corona; hicieron diligencias para controlar todo el proceso de preparación de la Armada, con el fin de evitar el desvío de dinero y los gastos innecesarios; finalmente, intentaron comprobar, con rigor, la gestión municipal del producto fiscal. En agosto y septiembre de 1640 la corte de Madrid y el *Conselho da Fazenda* de Lisboa discutieron nuevas iniciativas tributarias, hablando cada vez más insistentemente de una nueva “contribución general” o, como opción alternativa, de un aumento del encabezamiento de las sisas, una medida que, una vez más, necesitaría la colaboración de los ayuntamientos³². Paralelamente, la *Junta dos Efeitos* se dirigía a los ayuntamientos de las principales ciudades del reino para obtener el dinero que se necesitaba para enviar una nueva expedición con destino a América del Sur, donde la situación se tornaba cada vez más difícil.

El clima estaba creado para el desencadenamiento de un movimiento insurreccional, lo cual se verificó en Lisboa, como se sabe, el 1 de diciembre de 1640. Lo protagonizaron aquellos que estaban descontentos con el predominio de la clientela de Olivares y con el ataque a sus derechos corporativos. Teniendo en cuenta todo lo que hemos referido hasta aquí, no sorprende que el ayuntamiento de Lisboa se apresurase a apoyar a los revoltosos.

³⁰ Cfr. F. BOUZA ÁLVAREZ., “A nobreza portuguesa e a corte de Madrid entre 1630 e 1640. Nobres e luta política no Portugal de Olivares”, en *Portugal no Tempo dos Filipes...*, op. cit., pp. 207 ss.

³¹ Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, código 30, fols. 10-13v.

³² Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, código 30, fols. 21v ss.

3. D. Juan IV de Braganza y el diálogo con los poderes urbanos.

D. Juan, duque de Braganza, fue aclamado rey de Portugal tras la revuelta del 1 de diciembre de 1640, un evento que, como se sabe, colocó a Portugal en la ruta de la secesión de la Monarquía Hispánica. Hay que señalar que este monarca contaba con un núcleo duro de colaboradores que había adquirido experiencia gubernativa y administrativa al servicio de los Habsburgo, algo que acabó siendo determinante en las principales opciones políticas de esos años.

Si observamos el sistema político-administrativo portugués después de 1640, vemos que cambiaron pocas cosas, y lo mismo puede decirse de la composición de muchos de los órganos principales. Por otra parte, uno de los “lemas” del movimiento revoltoso era el de la “Restauración”, un vocablo que como se sabe significaba regreso al *status quo* tradicional, el bendito por la costumbre. En ese sentido, la red de tribunales de la Corona y de consejos palatinos -*Desembargo do Paço, Casa da Suplicação, Casa da Relação do Porto, Mesa da Consciência e Ordens, Santo Ofício da Inquisição, Conselho de Estado, Conselho da Fazenda*- se mantuvo intacta. D. Juan IV no tardó en confirmar la vigencia de las *Ordenações Filipinas* (1643). En cuanto a la relación de la Corona y los municipios, el nuevo rey anunció muy pronto que su intención era regresar al estilo tradicional de comunicación entre realeza y autoridades urbanas, materializado en la convocatoria frecuente de la asamblea de Cortes³³.

En términos políticos, la gran novedad fue el regreso del centro de decisión a Lisboa, después de sesenta años durante los cuales las resoluciones gubernativas eran tomadas en órganos con sede en Castilla. En el ámbito institucional, entre los pocos cambios destaca la creación de dos nuevos consejos palatinos, el Consejo de Guerra (surgido enseguida, en diciembre de 1640, días después de la revuelta) y el Consejo Ultramarino, este último creado en Julio de 1642 y especializado en la administración del imperio portugués, pero que, aún así, se inspiraba en el antiguo Consejo de la India (*Conselho da Índia*) creado en tiempos de Felipe III³⁴. En lo esencial, la acción del equipo de D. Juan IV no pretendía innovar, y nada nuevo hizo en términos constitucionales. Ni siquiera la creación de los consejos supuso una ruptura, puesto que la medida se limitaba a circunscribir áreas de actuación de carácter específico y a crear órganos especializados en la gestión de esas materias. En cuanto a los ministros que servían en el conjunto de los consejos palatinos, la continuidad fue, de nuevo, la nota dominante. El 10 de enero de 1641, o sea, sólo cinco semanas después de la revuelta - D. Juan IV confirmó la validez de todas las resoluciones y mercedes concedidas hasta el 1 de diciembre del año anterior que no hubiesen recibido aún las respectivas Provisiones, o que no hubieran pasado aún por la Cancillería³⁵. Fue un gesto importante, pues por su intermedio el nuevo monarca daba garantías al reino de que iría a respetar los compromisos asumidos hasta entonces.

Los años posteriores a la revuelta siguieron marcados por la tensión entre el Consejo de Estado -fundamentalmente controlado por la aristocracia- y la Secretaría de Estado. A semejanza de lo que había sucedido durante las décadas de 1620 y 1630, después de 1640 los

³³ L. R. TORGAL., *Ideologia Política e Teoria do Estado na Restauração*, Coimbra, 1981-1982; R. VALLADARES RAMÍREZ., *Felipe IV y la Restauración de Portugal*, Málaga, 1994, pp. 237 ss.

³⁴ Cfr. G. MARQUES., “La dynamique politique au Brésil sous le règne des Habsbourg. L’Estado do Brasil dans l’Union ibérique”, op. cit.

³⁵ ANTT. Ministério do Reino, liv. 161, fol. 180 v.

sucesivos secretarios de Estado adquirieron una creciente visibilidad política. Para desagrado de la aristocracia, el rey se apoyó en esas figuras -casi todas oriundas de los de la pequeña nobleza y de la magistratura letrada- para tomar algunas iniciativas de ensanchamiento de su esfera de autoridad, como era el caso del control de la burocracia y el incremento de la administración fiscal, sobre todo en el ámbito local, de las ciudades y las villas.

En este ámbito hay que destacar el papel desempeñado por la *Junta dos Tres Estados*, un órgano constituido en enero de 1643 responsable de la administración de los impuestos extraordinarios destinados a soportar el esfuerzo de guerra: la *décima*, los *usuais*, el *real d'água*, el *direito novo da chancelaria*, las *caixas de açúcar* y algunos otros. En las décadas siguientes, la *Junta dos Tres Estados* se convirtió, en estrecha articulación con la Secretaría de Estado y la *Contadoria Geral da Guerra*, en el principal instrumento regio dedicado a la supervisión del cobro de varios impuestos. Esta *Junta* se empeñó en aumentar la eficacia de la máquina fiscal de la Corona, por lo que, secundada por el Secretario de Estado, se inmiscuyó frecuentemente en las cuentas de los municipios. Esa actuación la hizo ser objeto de protestas de las autoridades urbanas, siempre muy celosas de sus derechos y su autonomía.

Entre las medidas tomadas por los ministros de la Corona durante 1640 y 1650, merecen destacarse aquéllas que, mediante una política de incorporación de bienes territoriales, condujeron al fortalecimiento de la base patrimonial de la Casa Real. Junto a ese crecimiento del dominio señorial del rey, se constituyó la Casa del Infantado (1654), vinculada a la persona del infante D. Pedro, y cuyo núcleo central contaba con el patrimonio de algunas familias nobles portuguesas que habían huido a Madrid³⁶. La Casa del Infantado era, por tanto, una nueva casa señorial de la familia real, independiente de la Casa Real y de sucesión autónoma, lo que representaba una segunda línea de los Braganza que servía de garantía por si fallaba la primera³⁷. Si a esto le añadimos la creación de la Casa de las Reinas (1642), podemos afirmar que una parte importante del área señorial del reino pasó a manos de los principales miembros de la familia real, algo que fortaleció su autonomía económica y les proporcionó un evidente capital político, sobre todo en lo que respecta a la relación entre la Corona y los ayuntamientos que se situaban en sus dominios.

En lo que respecta a la situación política, como sugeríamos, el primer problema con el que se debatían D. Juan y sus ministros fue el de encontrar recursos para mantener los combates. La nueva dinastía brigantina dispuso de muy poco tiempo para preparar la guerra, tanto en la metrópoli -contra la amenaza militar castellana- como en las "conquistas" contra todos aquellos que desafiaban el predominio de la Corona Portuguesa en las regiones asiáticas, africanas y americanas. De ese modo, por el esfuerzo militar, la política fiscal del equipo brigantino acabó siendo muy similar a la que había sido puesta en práctica durante los años anteriores. Como apunta Vitorino Guimarães³⁸, para soportar el esfuerzo bélico, la dinastía de Braganza implementó una fiscalidad tan diversificada como la que había sido planeada por los Habsburgo. Apostó por medios de obtención de recursos como la *décima*, los derechos aduaneros (*décima*, sisa y consulado), los derechos de consumo (*real d'água*, im-

³⁶ M. P. LOURENÇO., *A Casa e o Estado do Infantado, 1654-1706*, Lisboa, 1995, pp. 25 ss.

³⁷ M. S. da CUNHA., *A Casa de Bragança, 1560-1640. Práticas Senhoriais e Redes Clientelares*, Lisboa, 2000.

³⁸ V. GUIMARÃES., "As finanças na guerra da Restauração (1640-1658)", *Revista Militar*, Ano XCIII, núm. 1 (Janeiro de 1941), pp. 29-37; núm. 2 (Fevereiro de 1941), pp. 91-101; núm. 3 (Março de 1941), pp. 60-167; núm. 4 (Abril de 1941), pp. 215-228; núm. 5 (Maio de 1941), pp. 281-294; núm. 7 (Julho de 1941), pp. 406-420; núm. 8 (Agosto de 1941), pp. 471-483; R. VALLADARES., *La Rebelión de Portugal. Guerra, Conflicto y Poderes en la Monarquía Hispánica (1640-1680)*, Valladolid, 1998, pp. 225 ss.

puesto sobre el azúcar e impuesto sobre el pescado), la sisa o las *terças* de los municipios. Además de a estos impuestos, recurrió a varios expedientes de financiación, como el monopolio del tabaco, la devaluación de la moneda, los préstamos, la venta de juros y de algunos cargos, la requisición forzada de patrimonio y personas, etc.

En enero de 1640, el nuevo rey reunió una “asamblea de los tres estados” en la cual participaron procuradores enviados por casi todas las “ciudades y villas con asiento en cortes”. En esa ocasión los representantes de las autoridades urbanas reconocieron a D. Juan IV como rey y le juraron fidelidad. Se trató, sin duda, de un momento importante, pues con él la dinastía de Braganza vinculaba a los líderes urbanos a su causa, comprometiéndolos y logrando, de ese modo, la garantía de que colaborarían en el esfuerzo bélico. No obstante, a cambio de ese apoyo, la Corona concedió a las ciudades un espacio de negociación bastante grande, que potenciaba su capacidad política³⁹.

A inicios de febrero de 1641, con las Cortes convocadas, el rey decretó que se retirasen todos los tributos impuestos por Olivares, una medida que buscaba, claramente, la satisfacción de las reivindicaciones de las autoridades urbanas⁴⁰. Sin embargo, en esa misma reunión se acordó que los pueblos contribuirían al esfuerzo de guerra con 2.400.000 cruzados. El rey ordenó también al Consejo de Hacienda que efectuase una enumeración pormenorizada de todos los rendimientos de la hacienda real, para saber así cuanto pagaba la Corona en tenencias, juros, sueldos y demás gastos. Poco después, se encargó al mismo consejo que efectuase una relación de lo que sería necesario anualmente para mantener un ejército de veinte mil infantes y cuatro mil caballeros⁴¹.

En el mes de abril de 1641, la Secretaría de Estado solicitó al Consejo de Hacienda una lista de los títulos de juro que los castellanos y otros extranjeros tenían en Portugal, así como un retrato detallado de los ingresos y los gastos de la Corona. El objetivo de todas estas medidas era el establecimiento, con rigor, el estado de la hacienda de la Corona, para poder iniciar negociaciones, lo más pronto posible, con los suministradores que iban a abastecer a los ejércitos. Mas las medidas de rigor financiero no pararon ahí. En marzo de 1642 la Secretaría de Estado ordenó al Consejo de Hacienda que elaborase un “Libro de Cuenta y Razón de toda la hacienda que el rey tiene en Portugal, sus rendimientos y sus resultados”, el cual debería contener una información detallada de la situación de cada uno de esos rendimientos de la Corona. Jerónimo Contador, Júlio Galizo y Simão Freire fueron los oficiales escogidos para realizar esa tarea. Hay que señalar que Freire ya había recibido antes el encargo de elaborar ese “Libro de registro”, pero sin resultados, lo que indica que estas medidas de control no fueron bien recibidas por los diversos grupos sociales, en especial por las autoridades urbanas⁴².

Es cierto que la “media annata” y el “*real d'agua*” -los tributos más odiados y los verdaderos símbolos de la fiscalidad de los Habsburgo- fueron abolidos poco después de la revuelta (como dijimos, en febrero de 1641), y lo mismo sucedió con los tres derechos que cargaban la sal, que fueron reducidos a una contribución única de 500 reales por cada medida de sal, una contribución que tenía el estatuto de regalía, y no de tributo concedido por el reino. Como ha demostrado Jean Frédéric Schaub, la sal era una mercancía de gran valor estratégico, pues era muy buscada por los mercaderes del norte de Europa. Además, las fi-

³⁹ P. CARDIM., *Cortes e Cultura Política...*, cit., pp. 100 ss.

⁴⁰ ANTT. Ministério do Reino, liv. 161, fol. 16v.

⁴¹ ANTT. Ministério do Reino, liv. 161, fols. 191-191v.

⁴² ANTT. Ministério do Reino, liv. 161, fol. 111.

nanzas de varias localidades costeras, como Aveiro y Setúbal, dependían de su comercio⁴³. Esos intereses se vieron beneficiados por la secesión de la Monarquía Hispánica y la consiguiente liberalización del comercio de sal con los holandeses. Aun así, y pese a la desaparición de las principales tasas, durante los años siguientes a la revuelta, el comercio de sal volvió a generar tensiones. Se registraron muchas protestas contra el derecho que hemos referido, llegando a producirse, incluso desacatos y motines, como el de Aveiro de 1641. También quedaron descontentos los ayuntamientos que mantenían fuertes lazos comerciales con los demás territorios de la Península Ibérica, en especial en las regiones fronterizas con Galicia, León, Extremadura y Andalucía, puesto que en septiembre de 1641 D. Juan IV prohibió toda “comunicación y comercio” con España. En respuesta a esa prohibición se registró un aumento significativo del contrabando.

Hay que dejar claro que el equipo de D. Juan IV no abolió todos los tributos de la Monarquía Hispánica. El 3% del consulado, destinado a pertrechar a la Armada, siguió pagándose. Y a inicios de 1641 se aprobó un nuevo impuesto destinado a sufragar el esfuerzo de guerra, la *décima*, una exacción del 10% sobre el valor de todos los rendimientos y patrimonio. Este tributo era, en principio, general –o sea, que todo el mundo debía pagarlo, con independencia de su condición social-, y que, por lo menos en términos teóricos, puede ser encarado como un paso importante en el camino hacia la uniformización fiscal del reino⁴⁴. Poco tiempo después, en septiembre de 1641, el “*real d'água*” fue restablecido, lo que se justificaba por la evidente presión militar.

Algunos meses más tarde, en la reunión de Cortes de 1641-43, se introdujeron mejoras en el sistema de cobro de las *décimas*: para controlar el cobro de ese tributo se dispuso que el dinero de la *décima*, los juros, los beneficios de los cargos y los salarios fuese almacenado por los tesoreros y por los *almoxarifes*, quienes deberían entregar el dinero al tesorero mayor del arca de los tres estados. Sin embargo, y a semejanza de lo que ya ocurriera durante la década anterior, los mecanismos de administración fiscal revelaron poca eficacia. El fraude y la evasión fiscal fueron bastante generalizados, incluso porque los ayuntamientos consiguieron mantener bajo control casi todas las fases de la administración fiscal (cobro, custodio y envío del dinero a los oficiales regios). Ya en mayo de 1641, los proveedores del ejército se quejaron al rey porque mucho del dinero que había sido cobrado por medio de los tributos había desaparecido. Tampoco fueron pocos los municipios que, liderados por sus autoridades, se negaron a contribuir. La *décima* acabó siendo uno de los más rotundos fracasos de la política brigantina.

Las Cortes volvieron a ser convocadas en 1645-46, 1649 y 1653, una convocatoria relativamente frecuente que buscaba satisfacer, especialmente, las aspiraciones del “tercer estado”. Con la convocatoria se creaba la impresión de que el equipo de D. Juan IV estaba concediendo espacio a la participación de las ciudades y las villas en el proceso de toma de decisiones, en especial, en el “consentimiento” de nuevos tributos. No obstante, esta frecuente convocatoria de la asamblea de los tres estados constituía una clara señal de que las decisiones que se iban tomando, sobre todo en lo relativo a la fiscalidad, tenían un alcance limitado y una oposición bastante generalizada. La Corona sentía la necesidad de reunir a las Cortes con frecuencia para intentar convencer a los líderes de las diversas ciudades y villas para

⁴³ J-F. SCHAUB., *Le Portugal au Temps du Comte-Duc D'Olivares (1621-1640)*...cit., pp. 161ss y 285ss.

⁴⁴ Cfr. con J. I. FORTEA PÉREZ., “Reino y Cortes: el Servicio de Millones y la reestructuración del Espacio Fiscal en la Corona de Castilla (1601-1621)” en J. I. FORTEA PÉREZ y C. CREMADES GRIÑAN (dirs.), *Política y Hacienda en el Antiguo Régimen*, Murcia, 1992, vol. I, pp. 53-82.

que colaborasen en el esfuerzo bélico. Hay que señalar que, durante este periodo, las formas de resistencia al fisco fueron tan diversificadas y frecuentes como las de los años más rigurosos de la política fiscal del Conde-Duque de Olivares. Y por detrás del consenso que marcaba las inauguraciones solemnes de las reuniones de Cortes, los métodos aplicados por el equipo de D. Juan IV fueron muy semejantes a los que habían sido adoptados durante el tiempo de Olivares, o sea, siguieron la senda del "extraordinario fiscal"⁴⁵.

Pasados dos años desde la revuelta restauracionista, en enero de 1643, las Cortes dieron su "consentimiento" a los llamados "nuevos derechos", es decir, a los derechos impuestos por la cancillería regia⁴⁶. Esos derechos afectaban a todos los oficios y mercedes concedidos por el rey, por la Casa de Braganza, por el infante D. Alfonso, por el senado del ayuntamiento de Lisboa y por los donatarios, gravando, de este modo, a un grupo cada vez más vasto de dignatarios. Pese a que el senado de Lisboa advirtiese al rey de que crecían los clamores del pueblo contra los nuevos impuestos y, especialmente, contra los que tasaban el vino y la carne, en 1653 la Corona creó otros "nuevos derechos": la quinta parte de lo que rindiesen los bienes de la Corona y de las órdenes; además la Corona lanzó varios nuevos impuestos, como los *quintos* que se pagaban en la aduana de Lisboa, en la lonja de la sal y en la de los aceites. En el *Regimento da Chancelaria*, de septiembre de 1655, se confirmaba la vigencia de los "nuevos derechos" sobre los nombramientos de los oficios, y también sobre todas las mercedes, gracias, privilegios y facultades concedidas por el monarca.

Como respuesta a estos sucesivos intentos de la Corona para instaurar un control más firme sobre la administración fiscal, las autoridades locales diversificaron sus formas de resistencia. Así, por ejemplo, los proveedores militares se quejaban frecuentemente de que los administradores del "*real d'agua*" y del "real del vino" no les entregaban el rendimiento de esos impuestos, por lo que no conseguían abastecer a los ejércitos en las fronteras. Al mismo tiempo, la mayoría de los municipios recurría a todo tipo de medios para evitar entregar a la Contaduría General de Guerra la documentación relacionada con la fiscalidad local. Durante los veinte años que siguieron a 1640 las instituciones municipales fueron saliendo con la suya, siempre alegando que tales medidas eran una ofensa a su dignidad y sus privilegios. En muchas ocasiones, las corporaciones de artesanos lideraban las quejas y la resistencia a los nuevos tributos. Algunas de las protestas más vehementes provinieron de las bocas de los Jueces del Pueblo de Lisboa y Oporto⁴⁷.

Además de defender los privilegios locales, lo que motivaba esta actitud de los municipios era, fundamentalmente, una cuestión de "cultura fiscal". Es importante no olvidar que se vivía en una época en la que las poblaciones eran muy vulnerables a los años de malas cosechas y que eran muy frecuentes las coyunturas de verdadera carestía. Ante eso, resulta comprensible que las autoridades municipales no se inclinasen por contribuir a gastos externos al territorio del concejo y que luchasen, a toda costa, por preservar el control de la administración y del uso del producto fiscal. Ese tipo de actitud no es exclusivo de las autoridades locales, pues surgía también en otras esferas de la administración, como era el caso de los preparativos de la armada de defensa de la costa portuguesa. De hecho, los municipios - en particular el Senado de Lisboa - siempre estuvieron más preocupados con pertrechar la flota destinada a defender la costa del reino de Portugal que con la financiación de las flotas

⁴⁵ P. CARDIM., *Cortes e Cultura Política...*, op. cit., pp. 101 ss.

⁴⁶ E. F. de OLIVEIRA., *Elementos para a História do Município de Lisboa*, Lisboa, 1889, t. V, 1ª parte, pp. 420 ss.

⁴⁷ Cfr. por ejemplo los «Pedidos dos Mesteres» de Lisboa, ANTT, maço. XIV de Cortes, fols. 530 ss.

destinadas a proteger el comercio con Brasil o con la India. Por eso el ayuntamiento de Lisboa mantuvo un largo conflicto con la *Companhia do Comércio do Brasil*, boicoteando los esfuerzos de dicha asociación comercial destinados a pertrechar los navíos de guerra que iban destinados a América del sur. En lo que respecta a las demás ciudades costeras portuguesas, Leonor Freire Costa señaló que también ellas fueron muy afectadas por el monopolio del que gozaba la compañía con sede en Lisboa. La oposición a la *Companhia do Comércio* se hizo tan persistente que en noviembre de 1642 la Corona procedió a la reforma de su gobierno y administración⁴⁸.

La situación social descrita muestra otro aspecto que no es menos relevante para el proceso político: la intensificación de la relación entre la Corona y las autoridades urbanas. Las atribuciones que se sintieron en los años posteriores a 1640 originaron un cierto debilitamiento de la autoridad del rey, por lo que la monarquía se volvió más dependiente de los diferentes grupos que gravitaban a su alrededor. Pese a la consolidación del señorío de la Corona, a los señores con tierras se les confió una buena parte de la administración periférica, lo que condujo a un ascendente poder señorial, tanto laico como eclesiástico. Las autoridades urbanas también se vieron favorecidas por esta coyuntura, por lo menos esa es la impresión que se obtiene de las decisiones de las Cortes reunidas después de 1640, en las cuales se ve que los poderes municipales consiguieron preservar bajo su control el cobro y la administración del rendimiento de los impuestos. Siguió mandando efectivamente en buena parte de las regiones periféricas. Eso significó, entre otras cosas, la persistencia del fraude fiscal y del contrabando, unas prácticas de las que se siguieron beneficiando las autoridades municipales después de 1640.

Entre los varios poderes municipales, el del ayuntamiento de Lisboa ya venía, desde décadas atrás, desempeñando un papel especialmente importante y durante los años que siguieron a 1640 la ciudad de Lisboa y su ayuntamiento encontraron condiciones propicias para el refuerzo de su protagonismo. Los reyes brigantinos dirigieron sucesivas peticiones de préstamos al Senado lisboeta, a cambio de los cuales le otorgaba más privilegios y distinciones - el 21 de febrero de 1641, por ejemplo, se le concedió el privilegio de no pagar impuestos sobre el trigo que entrase en la ciudad. No hay que olvidar que esta ciudad contaba con el puerto oceánico de mayor tráfico del reino, por lo que desempeñaba un papel estratégico de gran importancia. En ella estaban las aduanas más lucrativas y, además, en su ribera era donde se realizaban los principales trabajos para pertrechar a la armada, tanto a las flotas anuales que iban a América del sur y la India como a las que protegían la costa portuguesa. Por estas razones, los ministros del ayuntamiento de Lisboa, junto con los oficiales de la lisboeta "Casa de los Veinticuatro", pudieron ejercer una vigilancia permanente sobre el trabajo gubernativo del monarca y de sus principales ministros. Además la comunidad mercantil lisboeta era especialmente influyente y, a finales de la década de 1640, los "hombres de negocios" encontraron condiciones favorables para adquirir una mayor visibilidad política por medio de la *Junta do Comércio da Companhia Geral do Brasil*. Esta compañía fue creada en 1649 y perduró hasta 1662, cuando su estructura fue alterada y, posteriormente, incorporada a la Corona.

Además de los elementos enunciados, la situación bélica -más o menos permanente durante los treinta primeros años de la dinastía de los Braganza- también dejó una marca profunda en la configuración de la lucha política. Para probarlo está la inmediata creación del

⁴⁸ L. F. COSTA., "Pernambuco e a Companhia Geral do Comércio do Brasil", *Penélope. Revista de História e Ciências Sociais*, 23 (2000) pp. 58-59.

Consejo de Guerra, el 11 de diciembre de 1640, inicialmente compuesto por una mayoría de hidalgos-soldados con experiencia militar. También fue muy importante, durante los años posteriores a 1640, todo lo relacionado con la infraestructura militar. De hecho, a partir de 1641 y con el pretexto de la guerra contra la Monarquía hispánica, la Corona creó una serie de nuevos cargos de gobierno militar, los cuales, en algunos casos, funcionaron como un nuevo instrumento del poder regio para intervenir territorialmente y en el espacio jurisdiccional de los ayuntamientos. En las posesiones sudamericanas de la Corona portuguesa debió suceder algo semejante.

Como ya tuvimos la oportunidad de decir, la inestabilidad social imperó durante el reinado de D. Juan IV, algo para lo que contribuyeron mucho la presión fiscal de la Corona, la devastación provocada por la guerra y las malas cosechas. Estos fenómenos originaron un aumento de la pobreza. La acción represiva efectuada por las fuerzas militares, tanto enemigas como amigas, provocó también grandes pérdidas entre las poblaciones, además de una constante conmoción entre las autoridades municipales. De hecho, las frecuentes “levas” de soldados –o sea, el reclutamiento forzoso de personas para combatir, que muchas veces se hacía para compensar las desertiones, también muy numerosas– aterrorizaban a las poblaciones, y toda esa perturbación se daba sin que la autoridad regia consiguiese contrariar la prepotencia de los comandantes militares, lo que provocó un descenso considerable del apoyo de los portugueses a la causa brigantina, especialmente a escala local⁴⁹.

En América del Sur, después de la victoria contra los holandeses, en 1654, los grupos in-fluyentes de los territorios que en el futuro integrarían Brasil adquirieron una conciencia mucho más aguda de su autonomía y autosuficiencia respecto a las órdenes venidas de Lisboa. Las autoridades locales sudamericanas, en especial los municipios pernambucanos, empezaron a mostrarse menos dispuestos a aceptar las injerencias de los representantes de la Corona portuguesa en su espacio de intervención política, y reivindicaron, por ejemplo, más privilegios para los ayuntamientos. Paralelamente, se fueron profundizando los rasgos de su identidad cultural y política, al tiempo que se acentuaba su autonomía financiera y económica respecto al reino. En este contexto, abundaron los conflictos entre los representantes de la Corona y los poderes locales sudamericanos, una situación que indica que a la autoridad regia portuguesa se le abría un nuevo frente de conflictos⁵⁰.

En continuidad con lo que sucedía antes de 1640, el dispositivo imperial fue perturbado por motines más o menos localizados. Las perturbaciones ocurrieron en América del sur –en Bahía en 1641; en Río de Janeiro en 1644 y 1660; en Pernambuco en 1666– pero también en otros puntos del imperio, como sucedió en Macao (1646), Ceilán (1652), Goa (1653) y Angola (1667)⁵¹. Hay que señalar que esos altercados fueron motivados, sobre todo, por conflictos de jurisdicción, por tensiones entre los comandos militares y las autoridades municipales, y no tanto por disfunciones substantivas en los dispositivos de vinculación de esos territorios a la Corona portuguesa. Por cierto, en su mayor parte, esos casos de agitación

⁴⁹ R. VALLADARES RAMÍREZ., *Felipe IV y la Restauración de Portugal*, op. cit., pp. 42 ss.; y F. D. COSTA., “Formação da força militar durante a Guerra da Restauração”, *Penélope. Revista de História e Ciências Sociais*, 24 (2001) pp. 87-120.

⁵⁰ E. CABRAL DE MELLO., *Olinda Restaurada. Guerra e Açúcar no Nordeste, 1630-1654*, 2ª edição revista e aumentada, Rio de Janeiro, 1998.

⁵¹ Cfr. L. R. de ALMEIDA FIGUEIREDO., “O Império em Apuros. Notas para o Estudo das Alterações Ultramarinas e das Práticas Políticas no Império Colonial Português, séculos XVII e XVIII”, en J. FERREIRA FURTADO (dir.), *Diálogos Oceânicos. Minas Gerais e as Novas Abordagens para uma História do Império Ultramarino Português*, Belo Horizonte, 2001, pp. 197-254.

social fueron motivados por el rechazo de la injerencia de autoridades externas en el espacio político local, por lo que no pueden ser vistos como la expresión precoz de sentimientos nacionalistas o de razones anticoloniales. Tal y como sucedía en el reino -donde este tipo de casos era habitual- los motines provocados por conflictos de jurisdicción acabaron siendo frecuentes, y lo mismo se puede decir de la agitación social provocada por la presencia de tropas.

Los fracasos diplomáticos de las décadas de 1640 y 1650, junto a la presión fiscal y la devastación provocada por la guerra, crearon un clima que favorecía la agitación social y los motines. Estos tuvieron lugar, dispersamente, por todo el reino y las conquistas. Como ya dijimos, su represión fue implacable, incluso en tiempos de D. Juan IV, un monarca al que la propaganda muestra, para la posteridad, como una figura amada por la población. Esas revueltas no sólo se dirigían contra las medidas regias de incremento de la carga fiscal, sino también contra el egoísmo de las oligarquías locales, contra la opresión de los soldados o contra la arbitrariedad de los señores territoriales. El clima social se hizo tan duro que, en ciertas ocasiones, la población llegó a festejar la llegada de las tropas españolas y la vuelta a la jurisdicción de los Habsburgo.

4. *El reinado de D. Alfonso VI: conflictos entre la Corona y las autoridades locales (1656-1668).*

Con el fallecimiento de D. Juan IV a finales de 1656, su hijo Alfonso le sucedió en el trono. Como el rey era menor de edad, el gobierno fue confiado a su madre, Doña Luisa, investida con el título de regente del reino. Durante esos años de regencia la presión fiscal no disminuyó, sino al contrario: en febrero de 1657, la regente Doña Luisa ordenó al Senado de Lisboa que efectuase un listado de las personas que aún debían dinero del “*real d’agua*” y que cobrase esas deudas⁵². En ese mismo año, se creó la Junta del Tabaco, que buscaba el incremento de los derechos cobrados sobre las entradas de tabaco en los puertos del reino. En septiembre de 1659 el *desembargador* Gaspar Abreu de Freitas fue encargado de reorganizar el sistema de cobros del quinto de los bienes de la Corona, para hacerlo más eficaz, pues hasta entonces el cobro de ese derecho era muy deficiente. Esa reorganización pasaba por retirar a las autoridades municipales la competencia de administrar ese impuesto y, pese a las vehementes protestas de los poderes locales, liderados por el ayuntamiento de Lisboa, después de 1660 el *desembargador* Abreu de Freitas y la Junta de los Tres Estados pasaron a controlar su cobro.

Poco después, tras crearse un nuevo impuesto regio -el “papel sellado”- se produjo uno de los momentos más espectaculares de la resistencia local al fisco de la Corona. La oposición de los ayuntamientos al “papel sellado” fue casi inmediata y, en la ciudad de Oporto, se produjo incluso un violento motín popular instigado por el ayuntamiento y por la Casa de los Veinticuatro de esa ciudad. Sólo se puso punto final al motín con la intervención de las autoridades eclesiásticas y del gobernador, que comandaba tropas de la frontera del Miño desplazadas expresamente para reprimir la agitación popular⁵³. Como consecuencia de ese altercado, la Corona ordenó realizar una investigación con la que identificar y reprimir a los

⁵² E. F. de OLIVEIRA., *Elementos para a História do Município de Lisboa*, Lisboa, 1891, t. VI, 1ª parte, p. 16.

⁵³ J. J. ALVES DIAS., “Para a História dos Impostos em Portugal. O papel selado no século XVII”, *Nova História. Século XVII*, 3/4 (1985) pp. 41-78.

culpables. Eso no impidió que, durante los años siguientes, siguiesen oyéndose muchos pedidos de suspensión del derecho del “papel sellado”.

Durante la regencia de Doña Luisa tuvo lugar uno de los acontecimientos más importantes de la actividad diplomática portuguesa de aquellos años: la firma del tratado de matrimonio entre la infanta Doña Catalina y el rey Carlos II de Inglaterra. Tras largas negociaciones, en junio de 1661 la Corona comunicó al reino el acuerdo de matrimonio que uniría a los Estuardo, la familia real de Inglaterra, con la Casa de Braganza. Esta alianza parecía fundamental para el reconocimiento internacional de la nueva dinastía reinante portuguesa⁵⁴. Para sufragar la dote -dos millones de cruzados- se recurrió a otro préstamo forzoso más. La Corona obligó a varias personas pudientes a comprar títulos de juro a plazo abierto y con un interés de veinte por millar, que se registraban en las casas de los derechos reales en Lisboa y en los *almoxarifados* del reino. Para lo que faltaba del montante de la dote se estipuló multiplicar por dos el encabezamiento de las sisas durante dos años, y que nadie estuviese exento de contribución. Estas medidas inauguraron una fase especialmente conflictiva de la relación entre la Corona y los poderes urbanos⁵⁵.

Durante los años que siguieron esa conflictividad no dejó de aumentar, incluso porque, durante la misma época, el aristócrata D. Luis de Vasconcelos y Sousa, 3º conde de Castelo Melhor, estaba ganando cada vez más notoriedad en el Palacio Real. Llegó a la corte investido con el prestigio de varias campañas militares exitosas (entre 1656 y 1661) y, habiendo sido consejero de Estado de D. Juan IV, logró construir una relación de gran confianza e intimidad con el manipulable D. Alfonso VI, sobre quien adquirió una gran ascendencia. Esa intimidad se hizo tan fuerte que, poco después de que el rey completase los dieciocho años, el conde de Castelo Melhor y su familia se instalaron en el palacio real. La fecha del 21 de julio de 1662 es decisiva en este proceso de conquista del poder, pues en ese día D. Luis de Vasconcelos y Sousa fue nombrado “*Escrivão da Puridade*”, uno de los principales oficios-mayores de la Casa Real portuguesa. A partir de entonces, la ascendencia de Castelo Melhor sobre D. Alfonso VI se acentuaría, con lo que dio cuerpo a la más influyente experiencia de “privanza” del Portugal del seiscientos.

Al ser nombrado “*Escrivão da Puridade*”, D. Luis de Vasconcelos y Sousa -que por entonces contaba con unos treinta años de edad- pasó a controlar las comunicaciones con el monarca, una situación que le permitió lograr que su clientela dominase los mecanismos de distribución de la gracia regia. Este sistema fue formalmente consagrado en el *Regimento do Escrivão da Puridade* (1663), un conjunto de disposiciones que interferían con el habitual sistema polisinodial de toma de decisiones. Este fue sustituido por un esquema más autocrático basado en el pequeño núcleo que envolvía al rey. Castelo Melhor formó una especie de “gabinete de confianza”, una junta privada que agilizaba los mecanismos gubernativos y aseguraba el control tanto de las decisiones políticas como de la distribución de mercedes y beneficios.

Así se inauguraba un nuevo ciclo gubernativo en el Portugal del seiscientos, protagonizado por el conde de Castelo Melhor, el valido de D. Alfonso VI. Hay que señalar que Castelo Melhor logró ese poder a costa de marginar a una parte considerable de la elite dirigente del reinado anterior, en especial la alta aristocracia, y de restringir la capacidad política de las autoridades urbanas -mientras Castelo Melhor fue valido, no se convocaron Cortes, y eso

⁵⁴ T. M. SCHEDEL DE CASTELLO BRANCO., *Vida de Francisco Mello Torres, 1º Conde da Ponte, Marquês de Sande. Soldado e Diplomata da Restauração, 1620-1667*, Lisboa, 1971, pp. 412 ss.

⁵⁵ E. F. de OLIVEIRA., *Elementos para a História do Município de Lisboa*, op. cit., pp. 273 ss.

que la Corona desarrolló varias iniciativas fiscales. Con el predominio de Castelo Melhor y de su línea política, se alteró incluso el propio ceremonial del Palacio Real y se acentuaron los controles sobre los canales de comunicación del monarca- a semejanza de lo que había sucedido, años antes, en la Monarquía Hispánica⁵⁶. Castelo Melhor instauró un régimen muy restringido de comunicación con el rey, alejándolo de la elite dirigente y negándose a convocar a las Cortes, con lo que se cortaba una de las principales vías de comunicación entre la Corona y los poderes urbanos. Al prescindir de las Cortes, el valido optó por expedientes de negociación más autoritarios e individualistas que minaban buena parte del peso político de las corporaciones urbanas.

Uno de los sectores de gobierno en el que se sintió ese entendimiento autoritario y pragmático del gobierno fue el fiscal. Desde comienzos de la década de 1660 el Consejo de Hacienda y la Junta de los Tres Estados estaban vendiendo juros, tenencias y jurisdicciones, tanto vinculadas al patrimonio real como a las casas de Braganza y Aveiro, y también algunos cargos⁵⁷. Cuando el montante resultante de todas estas operaciones se mostró insuficiente para hacer frente a todos los gastos de la guerra, en febrero de 1661 se impuso, por dos años, un derecho que afectó fuertemente a las finanzas locales: la nueva contribución de las monedas, que determinaba que por cada medida de trigo molida se cobrasen tres reales, y cinco reales por las medidas de centeno, maíz y cebada. En agosto de 1662 la Corona ordenó al senado del ayuntamiento de Lisboa que realizase un censo fiscal con todas las personas del reino, de cualquier calidad y condición, para reunir más dinero para cubrir las necesidades de la guerra. Una vez más el equipo de Castelo Melhor prescindía de las Cortes tanto para sancionar el nuevo tributo como para definir la modalidad de su cobro. Se estableció que el criterio sería la capitación, o sea, que cada persona debería pagar un determinado montante. Como era previsible, el senado del ayuntamiento de Lisboa se opuso a esa medida y resistió tenazmente, pero de nada le valió. Poco después, incluso, ese mismo senado lisboeta se veía obligado a conceder un “donativo” a la Corona equivalente al 10% de los juros, tenencias y salarios que pagaba de las rentas de la ciudad.

A mediados de 1663 la Corona se dio cuenta de que el cobro de la dote de Doña Catalina con el rey de Inglaterra estaba muy atrasado. Justificándolo así, D Alfonso VI y Castelo Melhor informaron a los cuerpos del reino que habían decidido prolongar la recarga impuesta dos años antes: la multiplicación por dos de las sisas. Hay que señalar que esa decisión fue tomada unilateralmente, de nuevo sin reunión de Cortes y prescindiendo de su “consentimiento”, un gesto que provocó un nuevo coro de protestas que condujo al deterioro de las relaciones entre los poderes urbanos y la Corona. Durante los meses que se siguieron, las ciudades acusaron a la Corona de incumplir sus compromisos fiscales. Alegaron que la tributación era excesiva, que los gastos pagados por esas exacciones habían aumentado mucho; que los ingresos habían disminuido, sobre todo las rentas de las aduanas, debido a la guerra y a la carestía provocada por ésta; el “desencaminamiento” del rendimiento fiscal era general; el *quinto* de los bienes de las órdenes militares, que era el rendimiento más voluminoso y de más fácil cobro, también había disminuido mucho. Además, los ayuntamientos se quejaban porque se les había retirado la competencia de cobrar ese rendimiento, y porque el tesorero mayor de la Junta de los Tres Estados, a las órdenes de Castelo Melhor, se había apropiado de la administración de esa renta.

⁵⁶ Â. B. XAVIER., “El Rei aonde pôde, & não aonde quer”, *Razões da política no Portugal Seiscentista*, Lisboa, 1998; cfr. A. FEROS., *Kingship and Favoritism...*, cit.

⁵⁷ E. F. de OLIVEIRA., *Elementos para a História do Município de Lisboa*, op. cit., pp. 239 ss.

En octubre de 1666 el equipo de Castelo Melhor volvía a embestir contra las autoridades urbanas, obligando al ayuntamiento de Lisboa a conceder un préstamo "extraordinario"⁵⁸. Este gesto "escandalizó" al senado de Lisboa y agravó el desencuentro entre las autoridades urbanas de la capital del reino y el equipo de Castelo Melhor. Como se puede verificar, el estilo "autoritario" del valido provocaba un fuerte resentimiento. Y no sólo entre aquellos que sentían la presión fiscal, sino también entre los miembros de la alta nobleza que se habían visto privados de su influencia sobre el rey y apartados de la corte, y eso en una época en la que, a aristocracia necesitaba mucho de las mercedes regias. El grupo de los descontentos era cada vez más numeroso y muchos de ellos se acantonaron en torno al infante D. Pedro y su clientela. Poco después de su matrimonio con Alfonso VI, la propia reina D. María Francisca se desolidarizó con su impotente esposo y, a corto plazo, pasó a ser vista como la cabeza de otra sensibilidad cortesana con fuertes vínculos con los intereses franceses en Portugal⁵⁹.

Al conocer todas estas querellas, la población de Lisboa comenzó a agitarse y, tanto el senado del ayuntamiento como el Juez del Pueblo de la Casa de los Veinticuatro, extremadamente resentidos con la postura autoritaria de Castelo Melhor y de su equipo gubernativo, exigieron la convocatoria de las Cortes. A 12 de noviembre el rey accedió a recibir a las autoridades urbanas de Lisboa, pero les comunicó que sólo convocaría Cortes después de oír al Consejo de Estado. Ante esta respuesta. Los dignatarios del ayuntamiento decidieron suspender el pago de los impuestos hasta que el rey convocase a los tres estados. El Consejo de Estado se reunió el 14 de noviembre y, ante la presión de la multitud que se formó alrededor del palacio real, las cortes fueron convocadas para el 1 de enero de 1668.

5. Comentarios finales

¿Qué conclusión puede extraerse de los datos presentados? Desde mi punto de vista, hay un aspecto que sobresale inmediatamente: la actitud de los monarcas Habsburgo hacia las ciudades portuguesas no fue muy diferente de la de los primeros reyes de la dinastía de Braganza. Unos y otros tuvieron plena conciencia del poderío de las autoridades urbanas y, durante su actuación, mantuvieron con ellas un diálogo constante que, en ocasiones, fue cooperativo y, en otras, se caracterizó por la confrontación.

A lo largo del periodo analizado se hizo patente que las instituciones municipales portuguesas formaban un conjunto poco solidario, lo que dificultaba cualquier intento de hacer más sistemática y coherente la actuación gubernativa de la Corona. El fuerte sentimiento localista y corporativo de las instituciones urbanas fue otro obstáculo importante, pues siempre reaccionaron negativamente ante las nuevas instituciones, ya fuesen las introducidas por los monarcas Habsburgo o las creadas bajo la dinastía de Braganza. El absentismo, el fraude fiscal y el contrabando fueron las principales formas que las oligarquías urbanas encontraron para manifestar su desagrado ante las órdenes venidas del rey, con independencia de que este residiese en Madrid o en Lisboa. El motín y la agitación popular solía ser el último recurso y, como hemos verificado, por detrás de esas movilizaciones se encontraban, a menudo, las propias autoridades urbanas, que sacaban partido de la agitación popular para presionar al poder regio.

⁵⁸ E. F. de OLIVEIRA, *Elementos para a História do Município de Lisboa*, op. cit., t. VI, pp. 607 ss.

⁵⁹ Á. B. XAVIER, P. CARDIM y F. BOUZA ÁLVAREZ., *Festas que se Fizeram pelo Casamento do Rei D. Afonso VI*, Lisboa, 1996.

Conviene señalar que, durante el periodo en que Portugal estuvo agregado a al Monarquía Hispánica, el resentimiento de las corporaciones urbanas no provenía necesariamente de la procedencia castellana de las órdenes. Este resentimiento provenía, especialmente, de que, por vez primera, los portugueses sentían que su rey era capaz de hacer sentir su influencia sobre el conjunto del ámbito territorial. Como ya dijimos, con los monarcas Habsburgo el dispositivo gubernativo y administrativo fue notablemente perfeccionado, lo que supuso una intensificación de la interacción política entre la Corona y las distintas ciudades y villas portuguesas. Como se puede imaginar, esa afirmación de la autoridad del rey provocó la insatisfacción de muchos. La condición de “no natural” del monarca y de muchos de sus ministros proporcionó un importante argumento en manos de todos los que estuviesen empeñados en resistir la interferencia regia. En ese contexto, la retórica patriótica era frecuentemente movilizada por las autoridades urbanas para aumentar la resonancia de sus protestas.

Después de 1640, con la entronización del jefe de la familia de los duques de Braganza, D. Juan IV y sus sucesores se esforzaron por presentarse como monarcas respetuosos con las libertades urbanas, que promovían el diálogo y permitían la participación de las autoridades locales en el proceso de toma de decisiones. Pese a todo, la conducta de la Corona respecto a las ciudades no fue, al final, diferente a la que había caracterizado a los monarcas Habsburgo. Pese a la convocatoria frecuente de Cortes, los principales focos de tensión entre la monarquía y las autoridades urbanas siguieron presentes: se sucedieron las medidas fiscales de carácter extraordinario y se intensificó la presencia de fuerzas militares en muchas ciudades y villas portuguesas. Tal como había sucedido durante los sesenta años del periodo de los Habsburgo, ante estas medidas las autoridades urbanas resistieron tenazmente. Sin embargo, ya no podían recurrir al imaginario patriótico, pues el rey que entonces las obligaba a pagar impuestos y a luchar era tan portugués como ellas.